

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

María Sandra Julià Julià y José Luis Martínez González, Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las consecuencias de poner en marcha antes del marzo de 2019 la desaladora de Oropesa del Mar, Benicassim y Cabanes.

Congreso de los Diputados, a 11 de julio de 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las dos desaladoras de Castellón costaron más de 106 millones de euros y ni siquiera se han puesto en marcha. En este caso, se planificaron ante la previsión de un crecimiento urbanístico desmesurado y al calor de proyectos residenciales como la nueva Marina d'Or de Jesús Ger en Cabanes, un proyecto anulado por los tribunales.

Una desaladora construida para tres municipios, Oropesa del Mar, Benicàssim y Cabanes. Una inversión millonaria para desalar agua con una capacidad máxima de 130.000 m³/día en segunda fase. Una inversión de 55 millones de €, con 15,8 millones de € provenientes de fondos europeos, destinada a satisfacer la demanda urbana e industrial, así como la de regadío, para que no se sobreexplotasen los acuíferos de agua subterránea de la zona costera. Esta explicación que redacta ACUAMED en su informe de viabilidad de dicha desaladora y que es igual a los informes de otras, sería un posicionamiento razonable si el estudio económico del coste de la infraestructura y de los costes de mantenimiento, explotación y gasto energético, no se hubieran asignado a una utópica o erróneo cálculo de la demanda esperada, haciéndola inviable.

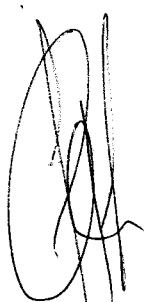
Estudios de profesionales, como los propios técnicos de los Ayuntamientos o la asociación de Geógrafos por ejemplo, concluyen en que las previsiones con la que se proyectó eran exageradas y la falta de demanda de las mismas que ACUAMED aún no ha intentado solventar, hace que el precio resultante del agua sea inasumible para cualquier ciudadano o empresa.

El Ejecutivo del Sr. Rodríguez Zapatero impulsó las desalinizadoras en vez del trasvase del Ebro en base a unas proyecciones de crecimiento poblacional y urbanístico que no se han cumplido tras el fracaso de la "burbuja inmobiliaria". Por lo que, la planta desaladora está parada por ausencia de demanda en las poblaciones teóricamente beneficiadas y por falta de finalización de la conducción de agua desde la planta hasta los depósitos de distribución de los municipios.

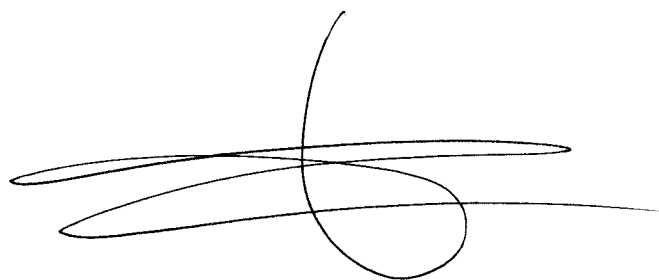
C.DIP 97107 25/07/2018 13:05

En relación a lo anterior, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Cuándo va a ponerse en marcha esta desaladora?
2. ¿Quiénes van a asumir la responsabilidad del coste de esta desaladora y por qué cantidades?
3. ¿Va a discriminar a los vecinos de tres municipios y a arruinar su economía personal por una instalación que ninguno de ellos necesita actualmente?
4. Tras las declaraciones institucionales de los Ayuntamientos en contra de asumir el coste de amortización de la infraestructura, ¿Qué solución va a darles a estos municipios en cuestión?
5. ¿Va a canalizar el agua de la desalinizadora a la Confederación Hidrográfica para que el uso sea provincial?
6. ¿Qué convenios les va a aplicar a los tres Ayuntamientos?
7. ¿Va a hacerse cargo el Ministerio del coste de la construcción de la infraestructura que se les exige a los Ayuntamientos? En caso contrario ¿Por qué?
8. ¿Qué demanda de usuarios existía en el momento de la planificación del proyecto? ¿Qué demanda de usuarios existe actualmente para esta desaladora?



María Sandra Julià Julià



José Luis Martínez González

Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos

C.DIP 97107 25/07/2018 13:05